

RESÚMENES / ABSTRACTS*

* Translated by Denis E. Carlin

Juan Goti Ordeñana, *El proceso para la disolución del vínculo matrimonial en favor de la fe*.

La disolución del matrimonio a favor de la fe, se inicia en la primera carta de San Pablo a los Corintios (7,12-17), que la Iglesia ha interpretado como una disolución del matrimonio, y la ha conservado a través de la historia. En el siglo XVI se amplió la disolución del matrimonio a nuevas figuras, que difícilmente se pueden incluir en el privilegio paulino, ante la necesidad de atender a algunas acciones misionales, las cuales aunque en un principio fueron para casos concretos el Código del 1917 les dio un carácter general para toda la comunidad cristiana. En el siglo XX, ante la apertura que ha tenido la sociedad a todas las culturas se ha visto necesario ampliar la disolución del matrimonio a nuevos supuestos. Esto ha dado lugar a tres vías de disolución del matrimonio, y en consecuencia tres cauces de tratamiento: el primero por la carta de San Pablo, el segundo por el reconocimiento del Código (cc. 1143-1147 CIC, y cc. 854-858 CCEO), y el tercero mediante la concesión, en cada caso, del Romano Pontífice. Los dos primeros supuestos no tienen un procedimiento porque se disuelven automáticamente, si se cumplen las circunstancias indicadas en la primera carta de San Pablo a los Corintios, y en Código de Derecho Canónico. Únicamente exigen una comprobación por el Ordinario para garantizar una recta actuación en cada caso. En cuanto a la tercera vía, por concesión del Romano Pontífice, como actúa con potestad vicaria en materia de Derecho divino, es necesario comprobar las condiciones requeridas para la concesión de la gracia. Por ello se establecen en estas Normas un proceso administrativo que se inicia en las Iglesias locales, sin previa autorización de la Sede Apostólica, y una vez recogido todo el material necesario, para comprobar que se dan las circunstancias requeridas, con el voto *pro rei veritate* del Obispo, se envía el expediente a la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, donde examinada toda la documentación recibida, si se estima que hay motivos suficientes lo presenta al Romano Pontífice, para que éste libremente, puesto que es una concesión graciosa, mediante rescripto, conceda la disolución del matrimonio anterior, y autorice la celebración de un nuevo matrimonio a favor de la fe de algún miembro de la Iglesia.

José Francisco Castelló Colomer, *El doble grado de jurisdicción y la doble sentencia conforme*.

En el presente trabajo se realiza, en primer lugar, un estudio comparado del derecho procesal civil italiano y español sobre el doble grado de jurisdicción, usando un método histórico-sistemático. Así, y en relación con los fundamentos del doble grado subrayamos las siguientes constataciones que se derivan de los razonamientos favorables y contrarios al mismo: la preocupación por revalorizar

el papel del tribunal de primer grado, así como el no entender de un modo autoritario la jerarquía entre tribunales; deseo auténtico de que los ciudadanos obtengan de los tribunales, sin dilaciones indebidas, la justicia anhelada; se quiere dar la oportunidad para poder reclamar contra una decisión considerada injusta pues todo ciudadano tiene constitucionalmente reconocido el derecho a la defensa. Esto es, en los ordenamientos procesales estatales, aun acogiendo el *favor veritatis*, se da mayor espacio y fuerza al principio de la certeza del derecho.

En segundo lugar, ofrecemos un estudio sobre el origen y la naturaleza del principio procesal canónico de la doble sentencia conforme, preguntándonos si como tal responde al deseo de obtener un pronunciamiento congruente con el *favor veritatis*. A continuación se ilustran los vínculos que la doble sentencia conforme puede tener con el *favor matrimonii* y con la exigencia de certeza moral.

La subjetividad de los jueces de segundo grado puede tener una incidencia importante en orden a obtener la verdad sustancial, lo cual nos lleva a analizar el mismo concepto de conformidad de sentencias, llegando, a través de éste análisis, a la asunción de la conformidad sustancial o equivalente.

Donato Miguel Gómez Arce, *Normas de los Tribunales Eclesiásticos españoles: aspectos económicos*

El presente artículo titulado “normas de los Tribunales Eclesiásticos españoles: aspectos económicos”, forma parte del capítulo cuarto de la tesis doctoral defendida el 21 de junio de 2004 en Salamanca con el título: “Los Tribunales Eclesiásticos en España: organización administrativa” y de la publicación en 2005 de su extracto. Este artículo se centra en la articulación de las normas particulares de los Tribunales Eclesiásticos por su finalidad, los patronos y peritos que intervienen en el proceso canónico, las tasas y lo que estas comprenden, para concluir con la regulación del derecho de asistencia jurídica gratuita.

El autor divide las normas publicadas según la finalidad que pretenden y afirma que existen cuatro finalidades fundamentales por las que se han publicado, consistentes en la orientación e información de los Tribunales y procesos, en poder regular y publicar las tasas, en mostrar la validez y nulidad del matrimonio canónico, y en una clara finalidad administrativo judicial.

El análisis interno que se efectúa queda centrado, en un segundo momento, en la figura de los patronos y peritos y su actuación en los procesos canónicos, la designación del abogado y la elaboración de un elenco que facilite la defensa y representación de las partes en el proceso. Se justifica la competencia que emana de la Iglesia y el Obispo diocesano para determinar el estatuto del letrado, procurador y perito.

Un aspecto fundamental de las normas particulares es el que contempla las costas judiciales. En dicho apartado los distintos Tribunales tratan de matizar su contenido especificando qué comprenden, si sólo las tasas del Tribunal, si aña-

den los honorarios de patronos y peritos, los suplidos y gastos extras. Existen publicadas tablas de litisexpensas, la regulación de las mismas y la determinación de quién afronta esos gastos, atendiendo a su vez la situación económica de las partes.

Atendiendo al poder adquisitivo o a la carencia del mismo, se articulan distintas normas para conceder el beneficio de justicia gratuita y la asistencia jurídica gratuita en las normas. Este punto, como desarrolla el presente artículo, es uno de los que más minuciosamente se ha legislado eclesiásticamente, debido a la adaptación de la ley 1/1996 de 10 de enero reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita y el Real Decreto 2103/96, de 20 de septiembre. Los Tribunales Eclesiásticos diseñan la gestión del patrocinio gratuito, las normas para que los fieles, carentes de los recursos necesarios, gocen de asistencia jurídica gratuita, si cumplen los requisitos adecuados.

Los distintos Tribunales justifican la asistencia jurídica gratuita desde el derecho canónico y desde el derecho a la asistencia gratuita, con un ámbito personal de aplicación y partiendo de unos requisitos básicos. No olvidan la posibilidad del reconocimiento excepcional del derecho y su contenido material, así como la extensión temporal y los casos de insuficiencia económica sobrevenida.

Aunque no todas las normas son paritariamente exhaustivas, si contemplan algunas de ellas la competencia y procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, mediante la solicitud, requisitos, subsanación de deficiencias si las hubiere, suspensión del curso del proceso o no, resolución y notificación de la misma, e incluso se legisla la revocación del derecho y los recursos posibles a tal efecto.

Se legisla sucesivamente la organización de estos servicios gratuitos, la designación de los patronos de oficio y la subvención y supervisión de los mismos.

Concluyen estas normas con el reglamento de desarrollo y aplicación de las normas para la asistencia jurídica gratuita. Estas normas ante todo se elaboran por el bien de los fieles y para garantizar su seguridad para poder actuar en juicio con todas las garantías.

José Luis Martín Delpón, *Libertad religiosa y Fuerzas armadas*.

El artículo que a continuación se expone trata sobre las relaciones entre el principio de libertad religiosa y el modelo profesional de Fuerzas Armadas. El derecho de libertad religiosa como pieza clave del Estado Social y Democrático de Derecho en el que nos encontramos extiende, sin duda, su ámbito de aplicación al militar profesional y a ciertos y determinados actos y ceremonias militares en los cuales dicho derecho tiene un marcado protagonismo.

En las siguientes líneas se tratará de fijar los límites entre el principio de libertad religiosa y el conjunto de derechos y obligaciones propios e inherentes del militar profesional, tomando como base el artículo 16 de la CE, que otorga la

legitimación activa “ a los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley “, pero ¿Existe algún límite para el ejercicio del derecho a la libertad religiosa del militar profesional?

La contestación a esta cuestión debe ser necesariamente afirmativa. En la Ley 17/1999, de Régimen de Personal Militar, se reconoce la aplicabilidad de este derecho al militar profesional si bien su ejercicio vendrá modulado por los criterios de Defensa Nacional y por lo establecido en las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas. De ello, se infiere que el ejercicio de este derecho, como cualquier otro derecho fundamental, no es absoluto y, de hecho, está sometido a limitaciones en la esfera castrense.

Por ello, intentaré reseñar aquellas situaciones en las que el principio de libertad religiosa pueda entrar en conflicto con la actividad diaria de las Fuerzas Armadas, centrándome en aquellos actos y ceremonias militares en las que se integran actos o ceremonias de culto, fundamentalmente, católico y, sobre todo, cuales son las vías que el ordenamiento jurídico abre para que las relaciones entre ambos factores sean pacíficas y no provoquen ningún tipo de discriminación por razón de religión en el seno de las Fuerzas Armadas.

Roberto Serres López de Guereñu, *La figura del Vicario para la vida consagrada*

El artículo examina la figura jurídica del Vicario Episcopal para la vida consagrada, analizando las fuentes normativas que han dado origen a la misma y poniendo de relieve los aspectos constitutivos de este oficio así como las competencias que le son asignadas por el derecho general.

El oficio de Vicario Episcopal surge en el Decreto *Christus Dominus* del Concilio Vaticano II, desarrollado posteriormente por el M.P. *Ecclesiae Sanctae*. Sin embargo, no hay una referencia explícita a la figura de un Vicario Episcopal para el ámbito de la vida consagrada hasta la publicación de Directorio *Ecclesiae Sanctae*, en el año 1973. El documento *Mutuae Relationes* y el vigente Directorio para el ministerio pastoral de los Obispos *Apostolorum Successores* trazan la configuración básica de este oficio vicario.

A la luz de estos documentos y del Código de Derecho Canónico, el autor analiza el ejercicio de la potestad de jurisdicción del Vicario Episcopal para la vida consagrada en relación con el Obispo diocesano, con el Vicario General y con los demás Vicarios Episcopales, en caso de que los hubiera.

En muchas Iglesias particulares se ha constituido la figura del delegado episcopal para la vida consagrada, con diversas configuraciones en virtud de las necesidades y las circunstancias concretas de cada diócesis. En el artículo se precisan algunas de ellas en relación con el ejercicio de la potestad de jurisdicción.

Por último, el autor analiza las competencias del Vicario Episcopal para la vida consagrada, que son distintas dependiendo de la mayor o menor amplitud

de la autonomía de cada Instituto de vida consagrada, estudiando los criterios generales que delimitan los ámbitos de la autonomía y de la dependencia de estos Institutos respecto del Obispo diocesano, de acuerdo con la naturaleza propia de cada Instituto y su misión en la Iglesia así como con la centralidad del ministerio pastoral del Obispo en la Iglesia particular.

Mercedes Vidal Gallardo, *Inclusión en el régimen general de la Seguridad Social de los clérigos de la Iglesia Ortodoxa rusa del patriarcado de Moscú*

(Real Decreto 822/2005, de 8 de julio, por el que regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los clérigos de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú).

El contenido de esta disposición afecta a los clérigos de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú en España, en los términos y en las condiciones establecidas en este Real Decreto.

Análogamente a lo que sucede con el clero diocesano de la Iglesia católica, respecto del cual, a efectos de su inclusión en el ámbito de la Seguridad Social como personal asimilado a los trabajadores por cuenta ajena, se considera que concurre en su actividad las características necesarias para esta consideración, básicamente el desarrollar una actividad pastoral al servicio de la comunidad, bajo las órdenes y directrices de los Ordinarios de las distintas Diócesis, todos estos extremos son de aplicación, “*mutatis mutandi*”, a los clérigos del Patriarcado de Moscú en España, toda vez que la asimilación a trabajadores por cuenta ajena tiene lugar en virtud de la actividad por éstos desempeñada.

A partir de esta premisa, se incorpora el citado colectivo y sus familiares que tengan la condición de beneficiarios, al campo de aplicación del Régimen General, de manera que puedan, por tanto, beneficiarse de la acción protectora de dicho Régimen, con la exclusión tan sólo de aquellas situaciones o contingencias que no estén previstas debido a las características particulares que presenta este colectivo.

Por otro lado, corresponde al Patriarcado de Moscú asumir los derechos y obligaciones establecidos para los empresarios en el Régimen General de la Seguridad Social. En este sentido, se observa de nuevo el paralelismo que existe entre el régimen previsto para este colectivo y las correspondientes normas que regulan las obligaciones empresariales en el ámbito de la Iglesia Católica y de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España.

Carlos Salinas Araneda, *El matrimonio religioso en la nueva ley chilena de matrimonio civil*.

El 17 de mayo de 2004 se publicó la nueva ley chilena de matrimonio civil que vino a reemplazar la anterior cuya vigencia venía desde 1884. La nueva ley introduce modificaciones significativas, la más importante de las cuales es la del divorcio vincular en sus tres vertientes de divorcio sanción, de común acuerdo y unilateral o repudio. Como una manera de mitigar el impacto que ello suponía

en una nación mayoritariamente católica, se ofreció la posibilidad de dar reconocimiento civil a los matrimonios celebrados en forma religiosa, para lo cual se tuvo a la vista la legislación española, si bien estaba la diferencia sustancial de la inexistencia de acuerdos entre el Estado y las confesiones religiosas. La regulación que finalmente se dio al tema desvirtuó por completo la idea original, de manera que en Chile es posible afirmar la subsistencia de un único y excluyente matrimonio civil cuya celebración, acorde con la nueva ley, reviste dos modalidades: una, sólo ante la autoridad civil y otra que, iniciada ante la autoridad religiosa, ha de continuar y culminar ante la autoridad civil, pero en ésta el matrimonio sólo tiene valor civil a partir de las gestiones que se hacen ante esta última autoridad, desconociéndose lo realizado ante la autoridad religiosa.

Juan Goti Ordeñana, *The process of dissolution of the marriage bond in favour of the faith*

The beginnings of dissolution of marriage in favour of the faith are found in St. Paul's First Letter to the Corinthians (1Cor 7,12-17), which the Church has interpreted as a dissolution of marriage and which it has preserved throughout its history. The 16th century saw the introduction of new grounds for the dissolution of marriage; these grounds could hardly be included in the Pauline Privilege but solved different problems raised by missionary activity. These new ways were originally to deal with concrete cases, but the 1917 Code gave them a general character for the whole Christian community. During the 20th century, given the openness which society has had to all cultures, it has been seen necessary to widen the dissolution of marriage to new approaches. This has given rise to three ways to dissolve a marriage and, consequently, three ways of dealing with it: the first, according to the Letter of St. Paul; the second, according to the Code (cc. 1143-1147 CIC, and cc. 854-858 CCEO); and the third, by means of a grace conceded in each case, by the Roman Pontiff. The first two approaches need no procedure because they are dissolved automatically if they meet the circumstances indicated in 1Cor or in the Code of Canon Law. They merely require proof for the Ordinary in order to guarantee a correct application in each case. When dealing with the third way, by concession of the Roman Pontiff, who acts with vicarious power in matters of Divine Law, it is necessary to prove the conditions required for the concession of the grace. Because of this, an administrative process is established which starts in the local church without prior authorisation of the Holy See; once all the necessary material is collected in order to prove that conditions are met, the case is sent to the Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith, along with the opinion of the Bishop *pro rei veritate*; once all the submitted documentation has been studied, if there are deemed to be sufficient grounds, the petition is presented to the Roman Pontiff, so that he may freely concede, given that it is grace which is being granted, the dissolution of the previous marriage by means of a rescript and authorise the celebration of a new marriage in favour of the faith of some member of the Church.

José Francisco Castelló Colomer, *The double grade of jurisdiction and the conforming double sentence.*

The article offers firstly a comparison, using a historical-critical method, of the double grade of jurisdiction in Italian and Spanish civil law. In relation to foundations of the double grade, we underline the following considerations which flow from the arguments for and against the same: the attempt to revalue the role of the court of first instance, without interpreting in an authoritarian way the hierarchy of the courts; the real desire that citizens should be able to obtain the justice they seek from the courts without undue delay; the wish to afford everyone the possibility of appeal against a decision which they consider unjust, given that every citizen has a right to self-defence found in the constitution. In the legal systems of the state, even though they accept the *favor veritatis*, greater space and importance is attributed to the principle of the certainty of law.

Secondly, the article offers a study on the origin and nature of the procedural principle in canon law of the double conforming sentence, wondering if it really answers the desire to produce a judgement consistent with the *favor veritatis*. The article goes on to illustrate the links that the double conforming sentence may have with the *favor matrimonii* and with the need for moral certainty.

The subjectivity of the second instance judges may play great importance in determining the substantial truth, which leads us to analyse the very concept of conformity of sentences, thus arriving from this analysis at the assumption of substantial or equivalent conformity.

Donato Miguel Gómez Arce, *Norms of Spanish Ecclesiastical Tribunals: economic aspects*

This article, based on a doctoral thesis defended in Salamanca on 21st June 2004, deals with the particular norms of Ecclesiastical Tribunals, looking at their purpose, patrons and experts who intervene in the canonical process, fees and what they entail; it ends up with the regulation of the right to free juridical help.

The author divides up norms published according to their declared purpose and claims that they have been published for four basic reasons: orientation and information on Tribunals and procedures, to regulate and publish fees, to demonstrate the validity/nullity of canonical marriage and obviously to foster the administration of justice.

The internal analysis then goes on to examine the figure of representatives and experts and their contribution to canonical procedures, the designation of an advocate and the drawing up of a list which helps the defence and representation of the parties in the process. Justification is provided for the competence afforded by the Church and the diocesan Bishop to determine the status of the lawyer, the procurator and the expert witness.

A fundamental aspect of the particular norms is that which looks at the cost of the judgement. In this area the different Tribunals try to nuance the content by

spelling out what is included: only Tribunal fees, or the additional honoraria of representatives and experts witnesses, or any other supplementary additional cost. There exist published lists of expenses of the *litis*, the regulation of such and the determination of who pays what, with due attention being paid to the economic situation of the parties.

On the subject of spending power or lack of same, different norms are worked out to facilitate free access to justice and free legal aid. As the present article underlines, this point has been meticulously worked out by ecclesiastical authorities, given the adaptation of the law of 1/1996 of the 10th January regarding Free Legal Aid and the Royal Decree 2103/96, of 20th September. The Ecclesiastical Tribunals sketch out the workings of free legal assistance, the norms by which those faithful who do not have the necessary resources enjoy free juridical help, if they meet the required conditions.

The different Tribunals justify free legal aid on the basis of Canon Law and on the right to free aid, within a framework of personal application and on meeting some basic requirements. The article does not overlook the possibility of the exceptional recognition of a right and its material content, and also length of process and cases of economic hardship which may arise.

Although not all the norms are equally exhaustive, some of them look at the competence and procedure for the recognition of the right to free legal aid on request, requirements, subsanation of any possible procedural deficiencies, suspension or not of the course of the procedure, the resolution and notification of the same, and there is even legislation covering the renunciation of the right and the possible resources for this.

Legislation then goes on to look at the organisation of these free services, the appointment of the legally necessary representatives and the payment and supervision of same.

These norms conclude with the regulation of the development and application of the norms for free legal aid. Above all these norms are worked out for the good of the faithful and in order to safeguard the safe access to participation in the legal process with every due guarantee.

José Luis Martín Delpón, *Religious Liberty and the Armed Forces*

The article deals with the relationship between the principle of religious liberty and the professional model of the Armed Forces. The right to religious freedom as a key piece of a social and democratic state under the rule of law in which we find ourselves extends, without doubt, in its application to the professional military person and to certain military acts and ceremonies in which this right has an important part to play.

Further, the article tries to fix the boundaries between the principle of religious liberty and collection of rights and obligations inherent and proper to a professional military person, taking as its basis article 16 of the Spanish Constitu-

tion, which grants active legitimization to “those individuals and communities without further limitation, in their manifestations, other than that necessary for the maintenance of public order protected by law”. But the question arises: is there any limit to the exercise of the right to religious freedom by the professional military?

The answer to this question has to be affirmative. In Law 17/1999, on the regime of military personnel, the applicability of this right to the professional military is recognised even though its exercise will be regulated by the criteria of National Defence and by what is established in the Royal Orders for the Armed Forces. From this we deduce that the exercise of this right, as with any other fundamental right, is not absolute, and de facto, is subject to limitations in the sphere of military activity.

Subsequently, the author tries to pull together all those situations in which the principle of religious liberty could possibly come into conflict with the day to day activity of the armed forces, paying particular attention to those acts or military ceremonies which include worship, basically catholic; above all he highlights the ways opened up by the juridical framework which make relationships between both factors smooth and which do not provoke any kind of discrimination on religious grounds within the Armed Forces.

Roberto Serres López de Guereñu, *The Episcopal Vicar for Consecrated Life*

This paper surveys the juridical person of the Episcopal Vicar for Consecrated Life, studying the normative sources which have generated it and highlighting the constituent aspects of the office, as well as the competences allocated to it by the general law.

The Episcopal Vicar's office arises from the Decree *Christus Dominus*, later developed by the M.P. *Ecclesiae Sanctae*. There is however no explicit reference to the person of the Episcopal Vicar for Consecrated Life until the Directory *Ecclesiae Sanctae* in 1973. The document *Mutuae Relationes* and the extant Directory for the Pastoral Ministry of Bishops, *Apostolorum Successores*, draw up the basic outline of this office.

In the light of these documents and of the Code of Canon Law, the author examines the praxis of jurisdictional power of the Episcopal Vicar for Religious Life in relationship to that of the Diocesan Bishop, of the Vicar General and of the other Episcopal Vicars, if there are any.

In different particular churches the Episcopal Delegate for Consecrated Life has been established, showing different ways of doing this in response to the needs and circumstances of each specific diocese. The article offers examples of different ways in which the power of jurisdiction is exercised.

Finally, the author examines the competences of the Episcopal Vicar for Consecrated life: these differ according to the greater or lesser degree of autonomy of each Institute of Consecrated Life, so one must study the general criteria

which define the fields of autonomy and dependence of each institute *vis a vis* the diocesan bishop, in the light of the proper nature of each institute and its mission in the church, but also in the light of the centrality of the pastoral ministry of the Bishop in the particular church

Mercedes Vidal Gallardo, *The Inclusion of the clerics of the Russian Orthodox Church of the Patriarchate of Moscow in the General Regime of Social Security*

(Royal Decree 822/2005 of 8th July, which regulates the terms and conditions of inclusion of the Clerics of the Moscow Patriarchate of the Russian Orthodox Church in the General Regime of Social Security)

The content of this ruling affects the clerics of this church while they work in Spain, according to the terms and conditions established by this Royal Decree.

There is an analogy with what happens to the diocesan clergy of the Catholic Church: they come under the provisions of Social Security because they are classed as employees, and their activity falls into the same category because it provides a pastoral service to the community under the orders and directions of the Ordinaries of the different dioceses. All the above fits *mutatis mutandis* the clerics of the Moscow Patriarchate, once they begin the same kind of employment.

Given this premise, the above group and their family members who count as dependents belong to the General Regime, with the possible exclusion of those situations or contingencies which were not foreseen, given the special characteristics which this group presents.

On the other hand, it is the responsibility of the Moscow Patriarchate to assume the rights and obligations which the General Regime establishes for employers. In this sense we see again the parallels which exist between the regime provided for this group and the corresponding norms which regulate the employer's obligations for the Catholic Church and the Federation of Evangelical Religious Bodies of Spain.

Carlos Salinas Aranedá, *The new civil marriage law in Chile*.

A new civil marriage law was published in Chile on May 17, 2004, thus replacing a law that had been in force since 1884. The new law introduces significant changes, the most important of which is the law of absolute divorce (divorce a vinculo matrimonii) in its three forms: sanction divorce, mutually agreed divorce and unilateral divorce or repudiation. In an attempt to mitigate the impact of this new legislation on a mainly Catholic society, the possibility of giving civil recognition to religious marriages, following the model of Spanish legislation, was contemplated. There was, however, one important difference –there are no agreements between the State and religious denominations.

The final legislation on this issue completely distorted the original idea, so it is possible to say that in Chile there is only one civil marriage, in two modes.

The first one is celebrated before civil authorities and the second, having started before a religious authority, must also be concluded by a civil authority. In the latter case, the validity of the marriage begins with the procedures before the civil authority, with complete disregard for any previous religious commitment.

